

LAS PROXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES



El 20 de febrero de 1977 los ciudadanos salvadoreños tienen la obligación constitucional de concurrir a las urnas electorales para depositar su voto que elegirá a los próximos Presidente y Vice-Presidente de la República.

Nos encontramos pues, en un momento político de gran importancia nacional y centroamericana; se trata no sólo de escoger a los futuros mandatarios que dirigirán los destinos del país durante cinco años, a partir del 1o. de julio de 1977, sino de optar por las alternativas, objetivos y programas que deben ofrecer los partidos políticos contendientes. No deberíamos estar, por consiguiente, ante una exclusiva escogitación entre distintos candidatos presidenciales, lo que indudablemente reviste importancia, sino ante una responsabilidad mayor: hacer vida el contenido y sentido de la democracia, de manera que el pueblo salvadoreño pueda libremente decidir sus propios destinos.

La UCA ha asumido en el pasado su propia responsabilidad en la vida política nacional, de acuerdo con su misión y naturaleza universitaria. Un ejemplo de ello lo constituyó el estudio científico que realizó y que se plasmó en el libro *El Salvador - Año Político 1971 - 1972*, con ocasión de las anteriores elecciones presidenciales. Las conclusiones de dicho estudio no eran nada halagadoras y desde esa perspectiva se insistía en causas estructurales que impedían el pleno ejercicio de la democracia y también se señalaban responsabilidades institucionales y personales en la deformación de un proceso político que iba cerrando gradualmente los canales de participación pacífica al pueblo salvadoreño, depositario de la soberanía nacional.

En el desarrollo político de un país existen diversos actores y ámbitos de responsabilidad. Pueblo, gobierno, partidos políticos, organizaciones populares y medios de comunicación principalmente, tienen sus propias y específicas obligaciones políticas. Para que exista una verdadera "fiesta cívica" se necesita el cumplimiento de esas obligaciones, porque las elecciones implican un proceso que no se reduce al momento de depositar el voto, sino a un conjunto de etapas y actividades que involucran la participación ciudadana, del gobierno, de las diversas organizaciones políticas y de sus dirigentes, y de los medios de información masiva.

La democracia no es solamente un sistema político. Es un sistema social que trasciende el orden global de convivencia, involucrando a la totalidad de los habitantes y a las esferas económica, política, social y cultural. Por eso, nuestros legisladores constituyentes, con idealismo y confianza, establecieron en la Carta Magna elecciones periódicas y términos amplios para las campañas electorales, pensando con seguridad que ellas son ocasión para hacer escuela práctica de participación democrática del pueblo.

La ciudadanía salvadoreña en general ha ido avanzando en su madurez cívica lo que se aprecia en variados aspectos de la vida nacional. Así, su participación electoral ha crecido y exige con mayor insistencia que sea respetado su voto, expresión de la soberanía popular, y que sea tomada en cuenta en las decisiones que afectan a la nación y que, por ahora, son atribución casi exclusiva de una minoría dominante.

Pero el deber político del voto es a la vez un derecho ciudadano; y por tanto, su exigencia de parte del Estado sólo es razonable en la medida en que realmente ese voto es garantizado y respetado.

El fraude, la represión y la imposición desnaturalizan totalmente ese deber y derecho creando la frustración y el engaño, caldo de cultivo de la abstención electoral y del ejercicio del sufragio únicamente como expresión de rebeldía, descontento o mofa. Conocemos muchos casos de papeletas electorales que estaban llenas de expresiones ofensivas y denigrantes.

Grande es la responsabilidad de un gobierno que se ampara en los postulados democráticos si en la práctica los niega, estorba o desnaturaliza, porque de esa manera origina aceleradamente una situación de aguda crisis política, en la que se buscan otro tipo de salidas que conducirían a enfrentamientos violentos. Precisamente porque la democracia es un sistema pacífico de convivencia social, su negación concluye en la ruptura de esa convivencia que instaura la violencia como medio de dirimir las discrepancias ideológicas.

El gobierno debe convencerse por eso de que el régimen



democrático conlleva una consecuencia obligada, la posibilidad de perder el poder. Si no se está dispuesto a aceptar esa posibilidad, la alternativa radica en el mantenimiento y fortalecimiento de la violencia institucional que tarde o temprano genera incontestablemente la violencia popular. Los intereses personales, de grupo, de clase, de partido, no pueden por consiguiente colocarse por encima de los principios y reglas del juego democrático que son esenciales para la existencia misma de la vida social.

Los partidos políticos y sus dirigentes también tienen una responsabilidad seria y trascendente en el proceso electoral. Su papel no es mecánico, de servir de instrumento para que los ciudadanos emitan su voto a favor de determinados candidatos; tampoco es de carácter egoísta, de luchar por un triunfo que les reportará ventajas en el ejercicio del poder político. Se trata de una responsabilidad más profunda y amplia: servir de ejemplo de vida democrática, contribuir al proceso de educación política del pueblo, presentar su visión de la realidad y su proyecto de desarrollo nacional, en fin, impulsar la participación real del pueblo en las decisiones que afectan a todo el país. La función crítico-constructiva de los partidos políticos, tanto de los que gobiernan como de los que están en la oposición, debe contener una dimensión verdaderamente política, es decir, superar los personalismos y las cuestiones incidentales, a fin de que todos comencemos a conocer, desde nuestra propia perspectiva, la realidad del país para imponernos claramente la obligación de contribuir al pleno desarrollo de nuestras potencialidades nacionales.

Este proceso electoral presenta una situación formalmente polarizada, entre el PCN y la coalición UNO. En consecuencia, los salvadoreños deberían examinar y los partidos contendientes presentar con honestidad la alternativa que representan y los objetivos y programas que ofrecen para el futuro quinquenio. El papel de los candidatos consiste fundamentalmente en descubrirse ante el pueblo para que éste analice si realmente demuestran la capacidad e integridad suficientes para llevar adelante la alternativa, los objetivos y programas de las organizaciones políticas que los postulan.

Por último, los medios de comunicación masiva tienen una función cívica de primer orden que cumplir. Información es poder y por ello ese poder tiene que ponerse al servicio del pueblo. La campaña electoral no debe ser simplemente un negocio para esos medios, sino, un vehículo de enseñanza democrática, exponiéndole al pueblo los aspectos principales de todo ese proceso electoral, sus incidentes, los diferentes mensajes y posiciones de los candidatos y partidos. Es lamentable observar cómo nuestra prensa comenta y reproduce más noticias políticas de carácter internacional que acontecimientos políticos nacionales. Sabemos más detalles de la campaña electoral norteamericana que de nuestras anteriores campañas electorales. Las recientes elecciones en los Estados Unidos de América son un ejemplo digno de imitar por los medios de comunicación; esos medios se encargaron de proporcionarnos información permanente y definitiva a las pocas horas de haberse realizado las elecciones. Estuvimos midiendo el pulso de lo que acontecía en cada Estado y en todo el territorio norteamericano de manera constante y segura. Aquí todavía estamos esperando publicaciones y comentarios periódicos sobre los resultados de las elecciones que tuvimos en marzo de este año. No hemos leído un solo editorial sobre la situación polémica que surgió a consecuencia del proyecto gubernamental de transformación agraria y tampoco sobre la situación electoral actual.

Estos meses finales del año y los primeros del próximo serán sin duda decisivos para el futuro del país. Esperamos que el evento electoral sea motivo serio de reflexión y análisis de la realidad nacional, así como de formulación de orientaciones y programas que posibiliten superar una situación crítica y difícil, en la que están puestas a prueba las capacidades morales e intelectuales de aquéllos que tienen grandes responsabilidades en el gobierno y en la dirección de la sociedad salvadoreña. ■